

Editoriales

Atención a los bloqueos

son graves sus consecuencias. Urge persuadir y ser firmes, a sabiendas de que el Gobierno está facultado para defender el interés general.

Cuando falta poco para que se cumplan dos semanas de protestas en el país, las consecuencias para la gente –en todos los niveles– de los bloqueos en las vías deben prender todas las alarmas.

En primer lugar está que cada vez sean más los hogares que afrontan serias dificultades para abastecerse, en particular en Cali y también, aunque en menor medida, en Bogotá.

Igualmente es cómo estas barricadas en las carreteras impiden que lleguen insumos médicos urgentes a los hospitales en pleno tercer pico de la pandemia de covid-19. También obstaculizan la distribución de vacunas a los diferentes puntos de inoculación.

Hoy está claro que cada vez son más las vidas humanas que se ponen en riesgo a causa de esta situación, además de las que ya se han perdido, como en el dramático caso, que conmovió al país, del bebé neonato que murió porque no se le permitió la movilización a la ambulancia que transportaba a su madre de Chocontá, Cundinamarca, a Bogotá. A la par con las interrupciones en las vías principales, cada vez se registran más casos de vías secundarias en zonas rurales y también urbanas, como en Cali, en las que un puñado de civiles impiden el tránsito, motivados por una causa de impacto local, o, peor, cobran de manera ilegal una suma para permitir el paso. Sin olvidar la desconcertante actitud del alcalde de Zipaquirá, Wilson García, que invitaba a bloquear la vía nacional, hecho que la Procuraduría deberá entrar a evaluar.

La situación es, reiteramos, alarmante. Se puede ver en las cifras: Fenalco habla de pérdidas por 880.000 millones de pesos para los comerciantes del país. En el Valle, esta cifra rondaría los 1,2 billones de pesos, según los gremios del departamento. Es evidente que la reactivación de la economía verá seriamente afectado su ritmo, con todo lo que ello implica en términos de generación de empleo, en una coyuntura tan crítica como la actual, con la pobreza creciendo y cada vez más colombianos sin trabajo estable.

Días dramáticos vive también quienes laboran en el sector agropecuario, sobre todo los pequeños, que ven cómo no pueden vender sus productos ni acceder a insumos.

Ante este panorama, el Gobierno está priorizando el diálogo y el llamado a la racionalidad, motivo por el que ha evitado, en la mayoría de los casos, escenarios de confrontación. Para que esta vía, que es la que debe prevalecer hasta que no quede más alternativa, rinda frutos es necesario que los alcaldes y gobernadores se concentren afondo en las negociaciones. De no poderse avanzar por el camino de los acuerdos y la persuasión, generando así un escenario de mayor escasez, el Gobierno tiene la obligación de acudir a las herramientas que para garantizar la prevalencia del interés general le otorga la Constitución.

Mientras tanto, hay que insistir en que los corredores humanitarios –como los que ya se han logrado en diferentes puntos por mediación de la Iglesia y de autoridades civiles– son una salida que no es incompatible con las protestas. Por el contrario, las conectan con las necesidades de miles de personas

que están sufriendo por esta situación que constituye, y esto no se puede perder de vista, una grave vulneración de sus derechos. editorial@eltiempo.com

Es increíble cómo estas barricadas impiden que lleguen insumos médicos a los hospitales en pleno tercer pico de la pandemia.